

Recurso de Nulidad Laboral Rol I. C. 168-2021.

“Fernando Valdés Espinoza; Cristian Sebastián Garrido Riveros y David Antonio Palma Muñoz, por el Sindicato Inter Empresas de Trabajadores del Transporte Y Servicios Forestales del Bosque e Industria de Constitución, en contra de “Sociedad De Transportes Maguillines Limitada”, “Transportes San Joaquín Ltda.”, “Empresa de Transportes El Diamante Ltda.”, “Sociedad de Transportes Carmar Ltda.”, “Estela Espinoza Jaque y Cía. Ltda.”, Francisco Joel Retamal Jorquera, “Sociedad Forestal Lage y Compañía Limitada”, “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.” y “Forestal Arauco S.A.”.

---

Talca, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

**Visto:**

En estos autos R. I. T. T-8-2020, R.U.C. 20- 4-02788049-07637-5 del Juzgado de Letras del Trabajo de Constitución, por sentencia definitiva de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, se **acogió** la demanda sobre tutela de derechos fundamentales laborales, presentada por don Fernando Valdés Espinoza; Cristian Sebastián Garrido Riveros y David Antonio Palma Muñoz, por el Sindicato Inter Empresas De Trabajadores Del Transporte Y Servicios Forestales Del Bosque E Industria De Constitución, en contra de “Sociedad De Transportes Maguillines Limitada”, “Transportes San Joaquín Ltda.”, “Empresa de Transportes El Diamante Ltda.”, “Sociedad de Transportes Carmar Ltda.”, “Estela Espinoza Jaque y Cía. Ltda.”, Francisco Joel Retamal Jorquera, “Sociedad Forestal Lage y Compañía Limitada”, “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.” y de “Forestal Arauco S.A.”, declarando en definitiva:

I.- Que, SE RECHAZA la excepción de previo y especial pronunciamiento de caducidad, incoada por las denunciadas principales y la solidaria.

II.- Que, respecto de la excepción de previo y especial pronunciamiento sobre Falta de Legitimidad Activa, dada su naturaleza jurídica, y habiendo sido esta sido resuelta en su oportunidad,



conforme consta a folio 241, resulta redundante e inoficioso referirse a la misma en esta parte del fallo.

III.- Que, SE DECLARA que existe un trabajo en régimen de subcontratación entre las sociedades principalmente denunciadas SOCIEDAD DE TRANSPORTES MAGUILLINES LIMITADA, R.U.T. N° 76.737.410-0, representada por don Ricardo Felipe Aguilar López; TRANSPORTES SAN JOAQUÍN LTDA., R.U.T. N° 76.156.451-K, representada por don Javier Muenza Salgado; EMPRESA DE TRANSPORTES EL DIAMANTE LTDA., R.U.T. N° 79.754.570-8, representada por don Francisco Joel Retamal Jorquera; SOCIEDAD DE TRANSPORTES CARMAR LTDA., R.U.T. N° 79.708.860-9, representada por doña María Francisca Manríquez Catalán; ESTELA ESPINOZA JAQUE Y CIA LTDA., R.U.T. N° 79.918.630-6, representada por don Juan Carlos Morán Barrios; SOCIEDAD FORESTAL LAGE Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T. N° 77.223.060-5, representada por don Luis Andrés Verdugo Chaves, con la denunciada FORESTAL ARAUCO S.A., R.U.T. N° 85.805.200-9, representada por don Juan Álvaro Saavedra Flores.

IV.- Que, SE RECHAZA la pretensión sobre declaración de existencia de un régimen de subcontratación, entre la demandada solidaria “Forestal Arauco S.A.”, R.U.T. N° 85.805.200-9, representada por don Juan Álvaro Saavedra Flores y las demandadas “TRANSPORTES JOSÉ AGUILAR CORTEZ E.I.R.L.”, R.U.T. N° 76.121.551-2, representada por don José Ricardo Aguilar Cortez, y FRANCISCO JOEL RETAMAL JORQUERA, R.U.T. N° 6.677.743-K.

V.- Que SE ACOGE la denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimiento de tutela laboral, deducida por el SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y SERVICIOS FORESTALES DEL BOSQUE E INDUSTRIA DE CONSTITUCIÓN, R.U.T. N° 65.055.033-1, inscrito con el N° 07050154 en el Registro Sindical Único de la Inspección Comunal del Trabajo de Constitución, en contra de las empresas SOCIEDAD DE TRANSPORTES MAGUILLINES LIMITADA, R.U.T. N°



76.737.410-0, representada por don Ricardo Felipe Aguilar López; TRANSPORTES SAN JOAQUÍN LTDA., EMPRESA DE TRANSPORTES EL DIAMANTE LTDA., R.U.T. N° 79.754.570-8, representada por don Francisco Joel Retamal Jorquera; SOCIEDAD DE TRANSPORTES CARMAR LTDA., R.U.T. N° 79.708.860-9, representada por doña María Francisca Manríquez Catalán; ESTELA ESPINOZA JAQUE Y CIA LTDA., R.U.T. N° 79.918.630-6, representada por don Juan Carlos Morán Barrios; FRANCISCO JOEL RETAMAL JORQUERA, R.U.T. N° 6.677.743-K; SOCIEDAD FORESTAL LAGE Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T. N° 77.223.060-5, representada por don Luis Andrés Verdugo Chaves; TRANSPORTES JOSÉ AGUILAR CORTEZ E.I.R.L., R.U.T. N° 76.121.551-2, representada por don José Ricardo Aguilar Cortez; SMRA SpA, R.U.T. N° 76.368.465-2, representada por don Jorge Morales Guzmán, y solidariamente en contra de FORESTAL ARAUCO S.A., R.U.T. N° 85.805.200-9, representada por don Juan Álvaro Saavedra Flores; y por ende SE DECLARA que todas las demandadas antes individualizadas han vulnerado los derechos fundamentales a la privacidad y a la integridad física y psíquica de los conductores del Sindicato, también ya individualizado.

VI.- Que, a consecuencia de lo anterior SE DISPONE la destrucción de las imágenes y audios captada por el Sistema Guardián instalado al interior de los camiones, en la cabina de los conductores pertenecientes al SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y SERVICIOS FORESTALES DEL BOSQUE E INDUSTRIA DE CONSTITUCIÓN, R.U.T. N° 65.055.033-1, medida que deberá ser cumplida dentro de quinto día de ejecutoriada la presente sentencia.

VII.- Que, asimismo, SE DISPONE que todas las denunciadas realicen una capacitación sobre vulneración de derechos fundamentales a todos sus trabajadores, representantes legales y jefaturas, la cual deberá ser efectuada por un funcionario de la



Defensoría Laboral del Maule, o un académico universitario del área laboral.

VIII.- Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA LA DESCONEXIÓN Y EL RETIRO DEFINITIVO del sistema denominado “Guardián”, ubicado en las cabinas de los conductores pertenecientes al SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y SERVICIOS FORESTALES DEL BOSQUE E INDUSTRIA DE CONSTITUCIÓN, R.U.T. N° 65.055.033-1, medida que deberá ser cumplida por las denunciadas principales y solidaria, así como también por el tercero coadyuvante, dentro de quinto día de ejecutoriada la presente sentencia.

IX.- Que, conforme lo dispuesto por el N° 4 del artículo 495 del Código del Trabajo, SE CONDENA a las sociedades demandadas principales y solidaria, y al tercero coadyuvante, a pagar solidariamente al SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y SERVICIOS FORESTALES DEL BOSQUE E INDUSTRIA DE CONSTITUCIÓN, R.U.T. N° 65.055.033-1, la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$ 40.000.000.-), a título de reparación de la vulneración antes constatada.

X.- Que, todas las sumas señaladas serán pagadas reajustadas.

XI.- Que SE CONDENA en costas a la parte perdedora.

En contra de esa sentencia, el tercero coadyuvante “SMRA SpA” (“SMRA”), dedujo recurso de nulidad en contra de aquella sentencia definitiva, alegando las causales del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, fundado en dos alegaciones de distinta naturaleza.

Presentaron recurso de nulidad en contra de aquella decisión judicial “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.”, “Sociedad de Transportes Carmar Limitada”, “Transportes San Joaquín Limitada”, “Empresa de Transportes El Diamante”, “Estela Espinoza y Compañía Limitada”, “Sociedad de Transportes Maguillines Ltda.”, “Sociedad Forestal Lage Y Cía. Limitada” Y Francisco Joel Retamal Jorquera, esgrimiendo las causales del artículo 478 letra b) del Código del



Trabajo, por haber sido la sentencia “pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica”; y en subsidio, la errada calificación jurídica de los hechos acreditados, la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, siendo necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal.

Finalmente, recurrió de nulidad “Forestal Arauco S.A.” alegando la causal de nulidad del artículo 477 inciso 1° en relación al artículo 183-A del Código del Trabajo; en subsidio, la causal del artículo 477 inciso 1° en relación a los artículos 183-B y 183-D, respecto de los artículos 485 y 5° inciso primero del Código del Trabajo; y, finalmente, también en subsidio de las anteriores, el motivo de nulidad del artículo 478 letra e) del mismo cuerpo legal precitado.

Declarados admisibles los recursos se procedió a su vista, oportunidad en que se escucharon alegatos de la partes del juicio, como del tercero coadyuvante.

**Y Considerando:**

**A) En cuanto al Recurso de nulidad de “SMRA SpA” (“SMRA”):**

**Primero:** Que ese tercero coadyuvante levantó como causa principal de invalidación, la establecida en **el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo**. La sentencia se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal (extra petita), al establecer que la salud de los trabajadores fue afectada por una cuestión no alegada por los demandantes, ni establecida como materia de prueba en juicio. Al fijar los hechos controvertidos el [señor Juez] a quo señaló como hecho a probar (N° 3) si el sistema Guardián tenía la *“intensidad lumínica suficiente para provocar ardor y enrojecimiento en los ojos de los conductores, y en definitiva producir riesgos al desempeñar los choferes la labor de conducción”*. Respecto de la intensidad lumínica del sistema, el tribunal concluyó *“...que efectivamente la luz que emana el dispositivo Guardián, no es perceptible para el ojo humano,*



*(...) que sin perjuicio de que la luz infrarroja se encuentre fuera del espectro visible por el ojo humano, aun así dichas fuentes de luz emiten radiación infrarroja y que (...) se vislumbra que el riesgo para la vida y salud de los choferes no está dado por la potencia lumínica de dicho dispositivo, sino que dicho riesgo se presenta por la exposición continua a la 6 radiación infrarroja...".* El vicio se configuró por la circunstancia que el hecho lesivo denunciado por los actores, y respecto del que el Tribunal exigió la actividad probatoria de las partes, se refirió a una característica técnica del sistema (la intensidad lumínica) y el Tribunal concluyó y declaró que no representa riesgo potencial alguno para la integridad física de los trabajadores. Sin embargo, el sentenciador construye recién en la sentencia y contra la prueba rendida por las partes, una decisión condenatoria que se basa en la “potencialidad dañosa” de una característica técnica totalmente diferente a la alegada, cual sería “la exposición continua a radiación infrarroja”.

Este recurrente desarrolla el concepto de intensidad lumínica (o luminosa), según ha sido legalmente definido, al Flujo luminoso por unidad de ángulo sólido, expresada en candelas (cd) o lumen/estereorradián. Es decir, la intensidad lumínica -o luminosa- se refiere a la cantidad de luz visible irradiada en una dirección y ángulo determinado. Por su parte, la radiación infrarroja o radiación IR (también denominada radiación térmica) es un tipo de radiación electromagnética diferente, de mayor longitud de onda que la luz visible, y que es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a -273,15 grados Celsius. La denuncia y los puntos de prueba están dirigidos a revisar “la cantidad de luz” que el Sistema Guardián emitiría hacia los ojos de los trabajadores. Sin embargo, la sentencia declara la existencia de la vulneración en base al “calor” que emitiría el mismo, cuestión que jamás formó parte de la controversia.

La primera vez que el concepto de radiación infrarroja apareció en la causa, como objeto de reproche, es en la sentencia. Lo que el tribunal declara como vulnerador de las garantías de la denuncia es la



mera existencia de un riesgo. Es el “riesgo por la exposición continua a la radiación infrarroja” lo que el sentenciador ha calificado como lesivo de la integridad física de los choferes, no la constatación de una afectación real, medible y demostrada.

Sin embargo, si la circunstancia de fundar la decisión condenatoria en base a una cuestión que no ha sido parte del debate no fuere suficiente para decidir la anulación de la sentencia, no se puede desatender la circunstancia que los mismos documentos e informes técnicos y periciales agregados en la causa son contestes en señalar que el uso del sistema Guardián “No representa ningún riesgo fotobiológico”, es decir, es la ciencia (y no las apreciaciones personales) la que confirma que el Sistema Guardián no representa ningún riesgo, de ninguna especie, para la integridad física de los choferes.

La sentencia recurrida se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal (extra petita) al acoger la tutela por vulneración de derechos no alegados en la denuncia de autos. Cita el considerando 34°, sobre la aplicación del apercibimiento del tribunal a quo por la omisión en la exhibición de los anexos de contrato de todos los conductores en donde se acordó, o se habría estipulado con los trabajadores la implementación del Sistema Guardián, con lo que confirma que estos no prestaron consentimiento para que sus datos biométricos fueran almacenados por un tercero, así como tampoco que las eventuales grabaciones que genere dicho sistema sean analizadas por una entidad ajena a la relación laboral.

En segundo lugar, en el considerando 36° “...se concluye que pese a no ser parte de dicho vínculo comercial, aun así Arauco tiene acceso a información supuestamente privada de cada evento, su hora de ocurrencia, locación y placa patente del vehículo en el cual tuvo lugar, dando cuenta así de la existencia de una relación no formalizada que deriva en la afectación a la privacidad de los trabajadores de las empresas denunciadas principalmente...”. El sentenciador se pronunció respecto de cuestiones que no quedan



comprendidas dentro de la esfera de ninguno de los hechos a probar, sino que se refieren a una garantía constitucional diversa de aquel objeto del juicio. El sentenciador yerra no sólo en los hechos, sino incluso en el derecho. La protección de los datos personales se constituye como una garantía diferente a la protección de la vida privada. El texto constitucional (artículo 19 N° 4) asegura la protección a la vida privada y de la honra de las personas y su familia, y la protección de sus datos personales.

De esta forma, desde la dictación de la Ley N° 21.096, de 2.018, la vida privada y la protección en el tratamiento de datos personales se erigen como garantías diferentes, autónomas e independientes, cada una con su propio contenido normativo.

La denunciante señaló como garantías vulneradas las del artículo 19 N° 1 y 4, pero respecto de esta última, la limitó expresamente a la vida privada y la honra. Nada dice la denunciante acerca de una eventual vulneración a la garantía de protección de los datos personales. Durante la audiencia de continuación de audiencia preparatoria y a propósito de la petición de los denunciantes de que fuesen exhibidos los anexos de contrato a que se refiere el considerando 34°, esa parte solicitó que se negara lugar a la diligencia, fundándose en que está relacionada con una eventual vulneración a la garantía de protección de los datos personales y no de la vida privada.

La recurrente reprochó que la sentencia incurriera en el vicio de extra petita, al condenar a “SMRA” solidariamente al pago de una indemnización por vulneración de derechos fundamentales sin tener la calidad de empleadora de los demandantes, ni de mandante respecto de esos empleadores. La sentencia incurre en el vicio de extra petita que se produce cuando el [señor] juez se extiende a cuestiones no sometidas a su decisión, por ejemplo, cuando la demanda resulta acogida respecto de una persona distinta de la que ha sido demandada. El sentenciador excedió los límites de su competencia, al condenar a su representada que no tiene la calidad de demandada,





empleadora ni mandante en los términos de los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo. De la denuncia aparece de manifiesto que no se señala a su representada como sujeto pasivo de la acción, tampoco lo hace en su parte petitoria. En segundo lugar, tampoco el juez incluye a “SMRA” en el considerando primero de la sentencia impugnada, en la parte que singulariza a las denunciadas y demandas. En tercer lugar, tampoco aparece “SMRA” como demandada en los considerandos tercero y quinto de la sentencia, que justamente reconocen a su representada la calidad de tercero coadyuvante. Y lo más importante, el juez a quo no incluye a “SMRA” en el párrafo V de la parte resolutive del fallo impugnado, que acogió la denuncia respecto de las denunciadas principales y solidarias, declarando que son éstas quienes han vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores.

Lo anterior deja en evidencia que la acción no ha sido dirigida en contra de “SMRA”, que la denunciante no formuló petición de declaración ni de condena en su contra, no obstante lo cual, resulta condenada solidariamente al pago de la indemnización.

En lo que dice relación con la manera como las infracciones influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, invoca el principio de la congruencia, que implica la necesidad de una debida correlación o identidad entre las pretensiones planteadas por los litigantes y la decisión judicial, e importa una delimitación para el ámbito y contenido de las resoluciones jurisdiccionales. Conforme el fallo impugnado, salta a la vista que la sentencia dictada por el a quo incurre en el vicio de extenderse a cuestiones no sometidas a la decisión del tribunal al señalar que: el riesgo para la vida y salud de los choferes no está dado por la potencia lumínica de dicho dispositivo (que era la cuestión sometida a su decisión), sino que dicho riesgo se presenta por la exposición continua a la radiación infrarroja (que es un asunto ajeno al debate y recién incorporado por el juez en la sentencia impugnada) infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que esa consideración es la que conduce a la declaración de



vulneración de la integridad física. Si el sentenciador se hubiese mantenido dentro de los límites fijados para la controversia, la única conclusión fáctica posible sería que la intensidad o potencia lumínica del sistema Guardián no representa ninguna vulneración, ni riesgo de afectación siquiera, de la integridad física de los conductores, conclusión que se desprende de lo señalado en los considerandos 16°, 17° y 19° de la misma sentencia. Quedó establecido que la intensidad lumínica del sistema no representa un riesgo para los conductores; omitiendo pronunciarse sobre otros aspectos ajenos al debate (como la exposición a radiación infrarroja) y considerando lo clara, contundente y reiteradamente señalado en la documental y pericial de la causa.

Lo mismo ocurre con la supuesta vulneración a la privacidad de los trabajadores, toda vez que las conclusiones que le sirven de sustento al tribunal a quo exceden, con mucho, el ámbito del hecho a probar N° 4, fijado para analizar la privacidad y la honra de los trabajadores. El hecho a probar apuntó a establecer si el sistema Guardián “tiene la capacidad de grabar imágenes y audios. Espectro y amplitud de dichas grabaciones”. No tiene que ver con la circunstancia de si los trabajadores habían autorizado y en qué términos, el tratamiento de sus datos biométricos, cuestión que se relaciona con una garantía constitucional distinta de aquel respecto de la cual se solicitó la tutela judicial. La pretendida vulneración a la privacidad es construida por el tribunal a partir de la supuesta falta de difusión, conocimiento y autorización de los trabajadores, tanto para la utilización del sistema como para el tratamiento de sus datos personales. Esas cuestiones se encuentra comprendida dentro de los límites del cuarto punto de prueba y si el tribunal hubiese ajustado su análisis y decisión a los asuntos comprendidos como objeto del juicio, esto es, la capacidad del sistema para grabar audio e imágenes y hubiera resuelto la denuncia en torno a esos conceptos, necesariamente habría de rechazar también este capítulo en concordancia con lo señalado en los considerandos 38° y 39°, en que



se asentó que el Sistema no tiene capacidad para grabar registros de audio; que los videos sólo tiene una duración de entre 5 a 8 segundos y que éstos se encuentran almacenados en una plataforma especialmente diseñada al efecto, sin que exista antecedente alguno de haber sido almacenados por los empleadores en un dispositivo diferente; y que no existen antecedente de difusión de las imágenes.

Finalmente, resulta del todo evidente que al condenar a su representada al pago de la indemnización que señala (\$40.000.000.-), sin que los denunciantes formulen reproche a su respecto, sin haber sido previamente demandada, y sin declarar siquiera que “SMRA SpA” sea de aquellas empresas que vulneraron los derechos fundamentales de los trabajadores. El tribunal excedió los límites de la controversia.

Por lo que dice relación con ***la segunda causa subsidiaria de invalidación que levantó el tercero coadyuvante, del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo***, e interpuesta en subsidio de la primera, la fundó en que la sentencia contiene decisiones contradictorias al dar por establecido que el Sistema Guardián es incapaz de grabar material audiovisual, y ordenar, no obstante aquello, la destrucción de registros de audio inexistentes, según se lee en los considerandos 37° y 38°, los que transcribe e invoca en su favor. Sin embargo, el sentenciador decide que “SE DISPONE la destrucción de las imágenes y audios captadas por el Sistema Guardián instalado al interior de los camiones, en la cabina de los conductores pertenecientes al SINDICATO”. En esta parte la contradicción es evidente. Si el juez ha llegado a la convicción de que no existe mérito para acoger la denuncia en su capítulo de vulneración a la honra, no se sustenta lógicamente la decisión de acoger la petición que se había formulado por los denunciantes, ni la de adoptar ninguna medida de resguardo o protección respecto de una garantía que no ha sido vulnerada.

La sentencia recurrida establece que las empresas demandadas han vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores del sindicato, pero contradictoriamente, condena solidariamente a esta



parte, un tercero, al pago de la indemnización. Basta recordar que “SMRA” no tiene la calidad de demandada ni se encuentra entre las sociedades nombradas en el párrafo V, siendo forzoso concluir que esta última no se encuentra entre las empresas que han vulnerado los derechos fundamentales de los denunciantes. Sin embargo, en el párrafo IX de la misma parte resolutive el [señor] juez Benavente condena a las sociedades demandadas principales y solidarias, y al tercero coadyuvante, a pagar solidariamente al sindicato, la suma de \$40.000.000.-, a título de reparación de la vulneración antes constatada. Los párrafos V y VI pugnan entre sí de manera irreconciliable, pues no es admisible, precisamente por contradictorio, que primero se exonere a “SMRA” de responsabilidad en la vulneración de derechos, y después esta misma sea condenada a reparar los efectos de tal vulneración.

El vicio que denunció, -contener el fallo decisiones contradictorias-, ha tenido una influencia sustancial en lo resolutive toda vez que, de no haber incurrido en éste, no pudo ordenarse la destrucción de material inexistente y sobre la base de un derecho fundamental no infringido.

Por otra parte, de no haberse incurrido en dicho vicio, su representada no habría sido condenada al pago de ninguna indemnización (como lo fue en la decisión IX), por haber sido previamente exonerada de responsabilidad en las vulneraciones denunciadas (Decisión VI).

Esa recurrente solicita que la Corte dé lugar al recurso de nulidad por los vicios e infracciones referidas, invalide la sentencia impugnada y de conformidad con el artículo 478 del Código del Trabajo, dicte la sentencia de reemplazo que corresponde, con arreglo a derecho y al mérito del proceso, declarando que se rechaza la denuncia y demanda en todas sus partes, con costas.

**Segundo:** Que según se constata por esta Corte, en la resolución de 29 de septiembre de 2.020, folio 238, se aceptó por el señor Juez de mérito la comparecencia al juicio de “SMRA SpA”



(“SMRA”), en calidad de tercero coadyuvante, fundado en que “... en el evento de acogerse la denuncia incoada, se verá imposibilitada de seguir prestando los servicios para las sociedades demandadas. Efecto que si bien no es el pedido en autos, de acogerse inevitablemente alcanzará a dicha sociedad, motivo que conduce a estimarla como tercero coadyuvante...” resolución que se encuentra ejecutoriada y por ende, inmodificable por este órgano de invalidación.

Que por disposición del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, al que se remite el artículo 23 del mismo cuerpo legal, al tercero coadyuvante se le permite “...interponer los recursos a que haya lugar... tanto... sobre la sentencia... definitiva...”, por lo que este recurrente está habilitado para deducir el recurso en análisis y por ende, afectarle los efectos del juicio.

**Tercero:** Que la primera causal de nulidad invocada por la partes antes individualizada, del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, por haber incurrido en el vicio de extra petita, fundada en que la sentencia estableció que la salud de los trabajadores habría sido afectada por una cuestión que no fue alegada por los demandantes, ni establecida como materia de prueba en juicio, al fijar como hecho atentario contra la integridad de aquellos, “la exposición continua a radiación infrarroja”.

Sobre el punto, cabe señalar que se “...la sentencia incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente concordarse con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por los litigantes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Por ende, el referido vicio formal se verifica cuando la decisión otorga más de lo solicitado en los escritos de fondo por medio de los cuales se fija la



*competencia del tribunal, o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias no sometidas a su conocimiento, en franco quebrantamiento de la correlación o correspondencia que ha de imperar en la actividad procedimental.*

*QUINTO: Que en las ideas expresadas se deja ver el principio rector del instituto en referencia: el de la congruencia procesal, que dentro del procedimiento encuentra diferentes fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. En virtud de dicha directriz es que se produce la vinculación de las partes y del juez con el debate, guardando el necesario encadenamiento de sus actos, permitiendo que éstos alcancen eficacia. Se trata, pues, de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos. Sustancialmente, se refiere a la conformidad que ha de existir entre la sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las pretensiones que las partes hayan expuesto oportuna y formalmente en sus escritos fundamentales agregados al proceso...”, según se resolvió en la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 8.713-2018 de 20 de agosto de 2.019.*

**Cuarto:** Que las peticiones concretas de la demanda, fueron la declaración de que los conductores afiliados a la organización sindical prestan funciones bajo régimen de subcontratación para la empresa principal “Forestal Arauco S.A.”, de la que los empleadores, sociedades de transporte que enumera, son subcontratistas, en los términos del artículo 183 A y siguientes del Código del Trabajo y se condene en forma solidaria a la demandada “Forestal Arauco S.A.”, al pago de las prestaciones e indemnizaciones señaladas en esta demanda, o en forma subsidiaria, en caso de que la empresa acredite haber ejercido los derechos de información, retención, y pago por subrogación que le impone el artículo 183 D; que las empresas transportistas y demandadas que indica, han vulnerado los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de Chile y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona del artículo 19



Nº4 de la Constitución Política de la República de Chile; que las empresas anteriores demandadas cesen cualquier conducta vulneratoria de los derechos fundamentales de los conductores afiliados a la organización sindical; que se ordene que aquellas empresas demandadas adopten medidas para evitar que los conductores afiliados a la organización sindical queden expuestos a una vulneración de derechos fundamentales similar, según medidas que indica, entre estas que se ordene el retiro de los camiones las cámaras de seguridad instaladas al interior de la cabina del conductor, la destrucción de las imágenes y audios captadas por las cámaras de seguridad instaladas al interior de los camiones, en la cabina del conductor; que las empresas transportistas, de manera solidaria y en forma solidaria o subsidiariamente, paguen a la organización sindical, a fin de obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales, \$40.000.000.- o la cantidad que se estime pertinente; que las empresas transportistas realicen capacitación sobre vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores, representantes legales y jefaturas.

Que al tenor de la sentencia en estudio, cuya parte resolutive fue transcrita en la expositiva de este fallo, guarda estricta y ajustada decisión sobre la acción deducida por los demandantes, sin que se observe la concesión de derechos a la parte ganadora que excedan las peticiones de ésta y que se contienen en su libelo tutelar.

La alegación del recurrente precitado, sobre la construcción de hechos diferentes a los que fundaron la demanda, que dicen relación con la *“intensidad lumínica suficiente para provocar ardor y enrojecimiento en los ojos de los conductores, y en definitiva producir riesgos al desempeñar los choferes la labor de conducción”*, y en que el Tribunal concluyó *“...que efectivamente la luz que emana el dispositivo Guardián, no es perceptible para el ojo humano, (...) que sin perjuicio de que la luz infrarroja se encuentre fuera del espectro visible por el ojo humano, aun así dichas fuentes de luz emiten radiación infrarroja y que (...) se vislumbra que el riesgo para la vida y*



*salud de los choferes no está dado por la potencia lumínica de dicho dispositivo, sino que dicho riesgo se presenta por la exposición continua a la radiación infrarroja...".* El sentenciador construyó y contra la prueba rendida por las partes, una decisión condenatoria que se basó en la “potencialidad dañosa” de una característica técnica totalmente diferente a la alegada, cual sería “la exposición continua a radiación infrarroja”.

Sobre esa alegación, debe señalarse que el derecho fundamental que alegaron los demandantes, es el referido al resguardo de la integridad física de los trabajadores, -cuestión que el señor juez de mérito dio por afectada-, al tenor de las probanzas incorporadas al proceso, sin que se haya afectado la causa de pedir ni el objeto de las alegaciones de las partes e interviniente, que se basaron precisamente en la defensa de aquella garantía constitucional. Si el hecho médico y científico que produce el amago en la salud de los trabajadores se produce por el empleo del dispositivo instalado en la cabina de los camiones, obsta a que se haya producido indefensión en contra del tercero coadyuvante, ya que la causa de pedir y el objeto pedido no se apartan de las pretensiones jurídicas de los actores.

Asimismo, debe tenerse presente que ante la afectación de una garantía constitucional, como es la integridad física de los trabajadores, derecho de origen constitucional, debe poner de manifiesto el carácter protector del Derecho Laboral, ordenando el fin de aquellos amagos o amagos, teniendo por fundamento los elementos probatorios incorporados en la causa y sin que el tercero coadyuvante, no obstante su fuerte actividad procesal, que se manifestó en su comparecencia al juicio, la contestación de la demanda, el aporte e incorporación de antecedentes probatorios y el ejercicio de facultades recursivas, no logró desacreditar la existencia de aquella afectación, contando con las herramientas procesales respectivas.





**Quinto: Que por aquella misma causa de invalidación** la recurrente alega que la sentencia incurre en el vicio de extra petita, al condenar a “SMRA” solidariamente al pago de una indemnización por vulneración de derechos fundamentales sin tener la calidad de empleadora de los demandantes, ni de mandante respecto de esos empleadores. El vicio de extra petita que se produce cuando el [señor] juez se extiende a cuestiones no sometidas a su decisión, por ejemplo, cuando la demanda resulta acogida respecto de una persona distinta de la que ha sido demandada. El sentenciador ha excedido los límites de su competencia, al condenar a su representada que no tiene la calidad de demandada, empleadora ni mandante en los términos de los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo. De la denuncia aparece de manifiesto que no se señala a su representada como sujeto pasivo de la acción, tampoco lo hace en su parte petitoria.

Que tal como se dijo precedentemente, la sociedad “SMRA SpA” (“SMRA”), compareció a esta causa y se le tuvo como tercero coadyuvante, fundado en que en el evento de acogerse la denuncia incoada, se verá imposibilitada de seguir prestando los servicios para las sociedades demandadas.

Conforme con aquella condición procesal, aquel tercero hizo uso de sus derechos e intereses, y desplegó en el proceso la totalidad de las excepciones de fondo como los derechos procedimentales que estimó necesario alegar, desde el inicio mismo del juicio, llegando incluso a contestar la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, rindió prueba, fue notificada de la sentencia en análisis y presentó el recurso en estudio.

No obstante lo anterior el reconocimiento de la calidad precedente y el ejercicio pleno de los derechos del tercero coadyuvante, la acción de autos no fue dirigida en su contra y no se le imputaron actos propios que hayan afectado o amagados las garantías constitucionales que fundaron la denuncia de tutela, razón por la que la decisión del Tribunal de mérito excedió lo pedido por las partes, en cuanto condenó a un tercero no demandado al pago de la



indemnización por infracción de garantías constitucionales, respecto del que no se accionó ni hubo pretensión de ninguna naturaleza en su contra, razón que motivará acoger **parcialmente** el recurso en esta parte.

**Sexto:** Que en lo relativo a la **segunda causa subsidiaria de invalidación que levantó el tercero coadyuvante, del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo**, será omitida la decisión al respecto, por haberse acogido la primera causa de invalidación.

**B) En cuanto al Recurso de nulidad de “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.”, “Sociedad de Transportes Carmar Limitada”, “Transportes San Joaquín Limitada”, “Empresa de Transportes El Diamante”, “Estela Espinoza y Compañía Limitada”, “Sociedad de Transportes Maguillines Ltda.”, “Sociedad Forestal Lage Y Cía. Limitada” Y Francisco Joel Retamal Jorquera.**

**Séptimo:** Que las demandadas precedentemente individualizadas, recurrieron de nulidad en contra de la sentencia, por las siguientes causales:

1. Causal del **artículo 478 letra b)** del Código del Trabajo, por haber sido la sentencia “pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica”.

2. En **subsidio**, la sentencia definitiva fue dictada aplicando una errada calificación jurídica de los hechos acreditados, por esto se interpone la causal del artículo **478 letra c)** del Código del Trabajo, siendo necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal.

**Respecto del primer motivo de invalidación-** del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo-, esto es, infracción a las reglas de la sana crítica, al determinó que al instalar y operar el sistema Guardián se vulneraron los derechos fundamentales de los choferes pertenecientes al sindicato denunciante, en base a la acreditación de un supuesto daño físico producido por el sensor del sistema, su



implementación y una supuesta incertidumbre generada en los choferes y el traspaso de datos, lo que habrían significado un deterioro físico y psíquico de los choferes del sindicato demandante.

La sentencia concluyó que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de los choferes del sindicato demandante y establece ciertos hechos como acreditados. No obstante, al establecerlos infringió de forma manifiesta los principios de la lógica formal.

Alega que la sentencia establece “...*Que, conforme lo anterior y si bien es cierto que la parte denunciada acompañó diversos informes documentales que concluyen que la luz led infrarroja del dispositivo Guardián, posee una frecuencia del emisor infrarrojo de novecientos cuarenta (940 nm) nanómetros, y centrado en novecientos veinticinco nanómetros (925 nm), lo cual conlleva a que sea invisible para el ojo humano, no es menos cierto que dicho sensor led efectivamente emite radiación infrarroja, la cual aun cuando no sea perceptible visualmente, de igual forma es soportada por los ojos de los choferes...*” (considerando décimo octavo).

Para asentar esos hechos, el juez valoró el peritaje realizado por don Eduardo Miranda Quilodrán, Ingeniero Civil Eléctrico de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, y en que el sentenciador estimó que el sensor del sistema Guardián, si bien no emite luz visible al ojo humano, emite radiación infrarroja. Agrega el [señor] juez a quo que el peritaje concluyó “*parcialmente*” que el sistema opera en el estado óptimo indicado por el fabricante y bajo lo indicado en la Resolución Exenta N° 3457 e internacional 64271”. Es decir, que no produce daño, de acuerdo a parámetros establecidos por regulación nacional e internacional.

Agrega que en el considerando 17° se refiere a la Resolución N° 3457 del Ministerio de Salud, que transcribe textualmente al señalar en el mismo considerando que: “...*hay mecanismos naturales de defensa (lágrimas, reflejo palpebral, etc.), por lo que una ligera exposición no tiene ningún efecto nocivo para los ojos. Pero sus efectos son acumulativos, así es que sobreexposiciones en una jornada laboral,*



*pero repetitivos durante años, dan lugar a largo plazo a daños en el cristalino. Cuando son fuentes con elevada intensidad (radiación solar, láser, etc.) pueden provocar quemaduras corneales...”*. Por último, en base a tres recetas médicas, informes psicológicos acompañados como documental (sin comparecencia como testigo de su emisor) y declaración de testigos de la denunciante (que se refieren a supuestas molestias en sus ojos) concluyó que la radiación infrarroja les produjo daño a los choferes, olvidando que el peritaje ya había acreditado con fundamento técnico que el sistema operaba bajo lo indicado en la resolución. Respecto a estos medios de prueba, señaló en el considerando 19°, que transcribe, sobre la existencia del daño por la exposición continua a la radiación infrarroja, teniendo en consideración la extensión de su jornada de trabajo, así como la exposición repetitiva a tal mecanismo, describiendo los tratamientos médicos respectivos ordenados a don Fernando Humberto Valdés Espinoza. En el considerando 20° describe los supuestos padecimientos de los choferes, citando a testigos y los informes psicológicos acompañados en autos.

Señala que ninguno de esos medios de prueba por sí mismo, ni juntos, permiten razonablemente llegar a dichas conclusiones, sea por la naturaleza misma de dichos medios de prueba, ya que se trata de documentos que emanan de la propia parte y que reiteran las imputaciones que señala la denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Lo anterior resulta manifiestamente contrario a la lógica, específicamente a la razón suficiente el tener por acreditado una vulneración a la integridad física con tal solo una receta médica de gotas para los ojos de un miembro del sindicato, el Presidente de la organización sindical, y una prescripción de lentes por parte de un técnico a otro de los afiliados, cuando es evidente que existen las mismas razones para que ello no sea atribuible al Guardián. Incluso más, el sentenciador dice que “sus trabajadores” requirieron atención médica, cuando lo cierto es que son solo 2 trabajadores de más de



100. Además, en la prueba no se indicó que causó de la prescripción. Así, la conclusión no tiene razón de ser.

Además, carece de sustento dar por asentado que hay un daño físico, a partir de los medios de prueba ya mencionados, si el sentenciador tuvo por establecido que el daño se producía después de años y la prueba corresponde a un par de meses de utilización de Guardián, así queda en evidencia que toda la prueba para acreditar el daño físico no se puede atribuir al Guardián.

La sentencia sostiene que *“...Lo anterior, conlleva a concluir que si el propio Prevencionista de Riesgos de una de las empresas denunciadas, quien es el encargado de velar por la vida, salud e integridad física y psíquica de los trabajadores al interior de la misma, y además designado para recibir alertas del Sistema Guardián como “Lider SSO”, según consta de la Planilla Excel incorporada por la tercero coadyuvante, no tiene conocimiento respecto de la efectividad de dichas afecciones, resulta atendible que los denunciantes le achaquen tales padecimientos al funcionamiento del dispositivo Guardián, más aún si estas principiaron con la instalación del mismo. Por lo tanto, y al relacionar tales circunstancias entre sí, se concluye que los padecimientos expresados, se encuentren revestidos de veracidad, más aún si pese a ser expuestos al Prevencionista de Riesgos, estos no fueron investigados, y corroborados por la conclusión anunciada en el acápite décimo séptimo, en base a la Resolución Exenta allí señalada, conforme a la simple lógica elemental con relación al principio de la primacía de la realidad y el principio in dubio pro operario...”*. La cita de los principios de la primacía de la realidad y de in dubio pro operario puso en evidencia que el [señor] juez carece de argumentación para llegar a la conclusión anterior, porque no argumentó de qué forma se hace presente alguno de tales principios en dicha conclusión; segundo, porque demuestra un profundo desconocimiento de la noción y alcances jurídicos de los mismos. El principio de primacía de la realidad establece lo contrario, es decir, la realidad de los hechos



prima sobre lo escrito, y acá el sentenciador realizó el ejercicio contrario. En el derecho nacional, el principio se fundamenta en el carácter consensual del contrato de trabajo que se contempla para proteger el trabajador, en orden a que se desconozca lo verdaderamente pactado, a través de documentos escritos. El principio está dirigido a efectuar una calificación “jurídica” de los hechos, en virtud de los cuales se puede deducir que existe un acuerdo consensual –expreso o tácito– sobre un aspecto que difiere de lo consignado en un instrumento.

En cambio, el principio de primacía de la realidad no está concebido como una especie de “máxima de experiencia” para que el [señor] juez pueda realizar deducciones de la prueba que siguen siendo “fácticas”, y menos que llegue a inferir de ello una situación que no se sustenta mínimamente en ninguna de la prueba rendida en autos. Por su parte, el principio in dubio pro operario se aplica como criterio de interpretación de normas, pero bajo ningún aspecto como un mecanismo de verificación o ponderación de la prueba.

El sentenciador desechó todos los informes presentados por esa parte en relación a la inocuidad del sistema, pues según su apreciación, estos no se referían a las consecuencias en el largo plazo. Sin embargo, el mismo argumento se puede usar para desvirtuar los medios de prueba a los que sí asigna valor y ya mencionados, los cuales no dicen relación con el largo plazo, sino sólo con una muestra tomada luego de un par de meses se iniciado el sistema. Sobre estos medios probatorios el sentenciador construye una vulneración a la integridad física, realizando una apreciación “*parcial y antojadiza*” de los medios de prueba. De hecho, desecha toda la prueba acompañada por esa parte para demostrar la inocuidad del sistema, específicamente desechó: a) el documento “análisis de Seguridad de la Radiación Óptica Foco del Iluminador el Led Infrarrojo del Sensor del Estado del Conductor de Seeing Machines Ltda., b) Suplemento del Informe prueba ORB Optronix”, c) el “Análisis de Seguridad de la Radiación Óptica del Iluminador del Led Infrarrojo del



Sensor del Estado del Conductor de Seeing Machines Ltda.”; d) el documento Test Report IEC. Photobiological safety of lamps and lamp system”; e) el Informe de la A.CH. S. N° 433484 denominado “Evaluación cuantitativa de luminancia por don Marco Salgado y Compañía Limitada”, que señala expresamente que el sistema opera en razón aceptable por debajo del valor tarea, documento de gran relevancia, ya que la Asociación es, en su calidad de organismo administrador del seguro de la Ley 16.744, una entidad especializada en seguridad y salud laboral. Rechazó todos estos medios de prueba pues, según su apreciación, no se hacen cargo del daño acumulativo. El sentenciador olvida que esos documentos, además del peritaje, cuando señalan que el sistema opera dentro de norma, significan que estos expertos autorizan su funcionamiento. Por ello, la única conclusión posible extraer es que el sistema no produce daño y no lo contrario, como hace el sentenciador sin justificación racional alguna. La Asociación Chilena de Seguridad concluyó que el sistema opera de manera aceptable, por debajo de valores tarea. Sin embargo, el sentenciador concluyó lo contrario en base a una receta de gotas para los ojos y de la prescripción de un técnico de lentes. Se está frente a un problema de valoración, que es especialmente grave en un tema de alcance médico. Lo lógico era concluir que el funcionamiento es aceptable tanto en el corto y en el largo plazo, pues sólo eso es posible extraer de los informes y no lo contrario. De otra manera se habría autorizado la utilización temporal o transitoria de Guardián. El sentenciador estimó que la afección se produce a largo plazo, pues los informes no se refieren específicamente al largo plazo. Es decir, no distinguen entre el largo y el corto plazo.

La sentencia tiene por acreditado “...Que, tal desconocimiento lleva a que los trabajadores del Sindicato denunciante, generen en su psiquis la duda ostensible y razonable respecto a estar siendo monitoreados durante su jornada laboral, circunstancia que los sitúa en un predicamento tal que configura una afectación a su integridad psíquica...” (Considerando 30°). La sentencia señala que tiene por



asentados estos hechos única y exclusivamente en base a lo declarado por los testigos de la parte denunciante y los informes médicos presentados como prueba documental, cuestión que es manifiestamente equivocada. De los testigos de la denunciante, consta que no relataron ningún episodio concreto en que haya vulneración a su integridad psíquica ni psíquica, sino solo conjeturas y supuestos. Por su parte, *resulta contrario a las máximas de la experiencia otorgar el valor probatorio de plena prueba a las declaraciones de los testigos de la denunciada*, (sic), ya que se encontraban en posición hostil hacia el sistema y su objeto era que el mismo se desactive. Por otro lado, otorgar valor a declaraciones de 5 personas ante un psicólogo (3 de ellos dirigentes sindicales), ninguna de las cuales fue corroborado en autos es “*antojadizo*” (sic), y con la misma facilidad que se les puede dar valor, se les puede desechar, pues su testimonio puede ser perfectamente falaz y de todas maneras está influido por la decisión de ganar el juicio, pues 3 dirigentes sindicales forman parte de estos supuestos análisis psicológicos.

Además, resulta muy relevante tener presente que dentro de la demanda se incluía la vulneración a la honra y vida privada, por ser constantemente vigilados, lo que fue desechado, es decir, no hay vigilancia alguna, sino solo la intención de proteger la vida y salud de los choferes, por lo que lo declarado por 3 dirigentes sindicales y 2 choferes ante una psicóloga, que no compareció en estrados no puede tener valor alguno, es prueba pre constituida para el juicio y los daños psicológicos en juicio deben ser probados mediante la prueba pericial, lo que no ha ocurrido en autos.

En relación a la proporcionalidad, los indicados recurrentes alegan que la sentencia incurre en dos yerros gravísimos, a saber: “la protección de la vida y salud de los trabajadores del sindicato denunciante, en lo que a la somnolencia en la conducción concierne, no se satisface con la instalación del dispositivo Guardián, pues con él únicamente se ataca la consecuencias de dicha, más no al origen de la misma, la cual fue identificada por dichos testigos como la “higiene





del sueño” (considerando 33°), y además el sentenciador señala que *“...al efectuar simulaciones del sistema, y dejando de lado los eventos que no produjeron distracción y aquellos que no activaron el dispositivo, este únicamente alertó en 15 de cada 22 eventos, es decir, presentó un porcentaje de efectividad de solo el 40.54% (cuarenta coma cincuenta y cuatro por ciento)...”* (considerando 25°). Lo relativo a la causa basal versus las consecuencias de un accidente laboral no resiste mayor análisis, lo uno no implica lo otro y ambas formas de prevenir accidentes son totalmente válidas y, además, según lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, obligatorias. Sin embargo, en términos de valoración, el mayor yerro corresponde al análisis acerca de la fiabilidad del sistema. Sobre la base de la inspección personal, [el señor juez] afirmó que éste tendría un 40,54% de efectividad, no obstante señalar que durante dicha diligencia el sistema detectó 15 de 22 eventos. Es decir, comete un grave error matemático puesto que 15 de 22 eventos correspondería a una efectividad de casi un 70% y no un 40,54%. Se afectó la proporcionalidad de la medida de protección de los trabajadores, sino que sin conocimiento técnico alguno, pretendió transformar su inspección en un peritaje técnico para lo que no se encuentra capacitado. Como primer asunto, señala que el objeto de la Inspección personal del Tribunal era que el sentenciador viera la operación y funcionamiento del sistema. No se trataba de determinar su fiabilidad ni tasa de fallo, pues evidentemente el sentenciador (como abogado) carece de las competencias técnicas requeridas para realizar tal pericia. De esta manera, extraer conclusiones de la inspección personal acerca de la fiabilidad del sistema sin la aplicación de ningún método científico y sin conocimientos técnicos carece de razón suficiente. Además, señala el sentenciador que no es posible que sea efectivo lo alegado por esta parte en relación a los supuestos fallos del sistema, y que no hay antecedente en autos de la supuesta “inteligencia artificial” que utilizaría. Ello es contradictorio con lo señalado por el propio sentenciador y demuestra que de la prueba



extrajo conclusiones erradas. La sentencia reconoció en muchos de sus considerandos que el sistema funciona en base a un algoritmo. Incluso en el propio considerando en que se menciona lo alegado respecto a la inteligencia artificial, el sentenciador señala que: “...*tal circunstancia debiera ser descartada desde ya, pues basta con tener en cuenta que su funcionamiento depende de un observador humano que labora en el centro de procesamiento de datos denominado “24/7 Guardián Center...”*. Al reconocer que el “observador humano” labora en un centro de procesamiento de datos, está reconociendo que se procesan datos que funcionan en base a un algoritmo. Por ello, el ejercicio del sentenciador es errado en su origen, ya que trató de simular eventos de distracción frente al sistema y éste los detectó 15 de 22 veces. Eso es todo lo que se puede extraer de la inspección personal del tribunal. Sin embargo, lo que es más grave es que se calculó erradamente el porcentaje de detección de eventos (15 de 22) que es mayor a un 68% y no de un 44%. De esta forma, la única conclusión posible de extraer del precario ejercicio es que el sistema funciona correctamente y previene accidentes.

En lo que dice relación con la privacidad, señala la sentencia que “...*Arauco tiene acceso a información supuestamente privada de cada evento, su hora de ocurrencia, locación y placa patente del vehículo en el cual tuvo lugar, dando cuenta así de la existencia de una relación no formalizada que deriva en la afectación a la privacidad de los trabajadores de las empresas denunciadas principalmente...*” El error de interpretación es que la información que se extrae del sistema no es privada. Son datos que identifican a un camión y empresa transportista, además de los datos relevantes del evento, nada más, no hay intromisión alguna a la intimidad de los choferes. La extracción realizada por el sentenciador es antojadiza y no es reflejo de la prueba rendida en autos.

Afirma que la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo que cita, así como el



artículo 456 del mismo cuerpo legal. El Código del Trabajo no entrega un concepto de lo que es "sana crítica", pero aporta parámetros que deben tenerse en cuenta. Conceptualiza la sana crítica, afirmando que la valoración de la prueba no se traduce en una libertad absoluta, por el contrario, no basta con que el juez se convenza a sí mismo, o así lo manifieste, sino que ha de cuidarse de convencer de su propia convicción a los demás, es decir, a las partes en concreto.

La sentencia recurrida infringió las reglas de la lógica, el principio de la razón suficiente, ya que el fundamento de la sentencia resulta inconsistente. Se encuentra desprovista de un soporte racional.

Los recurrentes precitados reiteran sus dichos sobre la falta de razón suficiente. Sostienen que el derecho a la integridad física y psíquica y la privacidad no resulta acorde con las normas de la lógica. Existe mucha prueba que lleva a concluir que no hubo vulneración, y por el contrario, la prueba en que se basa el sentenciador no permite concluir las vulneraciones, pues emanan de la propia demandante y fueron hechas especialmente para el juicio como lo son las recetas y los informes médicos. Hay abundante prueba técnica y de autoridades administrativas y de salud para llegar a la conclusión contraria. A las que arribó el sentenciador, deben estar respaldadas en antecedentes materiales y no pueden emanar de meras suposiciones, lo que aquí no ocurre. El sentenciador supone que la razón de los padecimientos es el sensor infrarrojo del Guardián, pero de la prueba no es posible afirmar eso, máxime si consideramos que *"...el supuesto daño se produciría después de años..."* (sic); y, los certificados fueron emitidos solo después de meses de uso del sistema. La sentencia desechó los informes técnicos de universidades (DICTUC de la Universidad Católica de Chile), de organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo (ACHS), resoluciones de autoridades de salud (Minsal) y administrativas (Dirección del Trabajo) y el peritaje, que demuestran que el sistema no produce daños y opera de acuerdo a la norma. Sin embargo, la sentencia concluye que si hace daño porque no se pronuncian expresamente sobre lo que ocurre al largo plazo.



Pero olvida que no hay prueba alguna respecto al largo plazo, pues el sistema no ha operado en largo plazo. Asimismo, sostiene que el sistema no es eficaz, sin embargo, de su propia inspección, carente de competencias técnicas, por cierto, se desprende que si es eficaz, ya que -obviando su grave error de cálculo- afirma que detectó casi el 70 % de los eventos. La línea argumental empleada por el tribunal a quo carece de una lógica adecuada.

En cuanto al modo en que las infracciones denunciadas afectaron sustancialmente lo dispositivo del fallo, la prueba aportada no logró dar por establecidas las vulneraciones, ni siquiera indicios de ellos y condujo al [señor] juez de la instancia, que al acoger la demanda declaró que habría incurrido en vulneración de derechos fundamentales. I

***En forma subsidiaria, los ya citados recurrentes, alegan la causal de nulidad del artículo 478 letra b) [del Código del Trabajo],*** errónea calificación jurídica de los hechos. Describen el proceso de aplicación de la ley para surgir la “calificación jurídica” que corresponde a una cuestión de derecho, que se refiere a la determinación de si un hecho establecido se encuentra regulado por la norma legal que resuelve el asunto controvertido. Esto tiene un límite, ya que no se puede “modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”. Además, de acuerdo al ordenamiento, un derecho fundamental resulta lesionado cuando “el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial”. La sentencia definitiva incurre en el vicio de errónea calificación jurídica de los hechos establecidos, debido a que en base a ciertas conclusiones fácticas obtenidas por el Tribunal de la instancia, es decir, en base a hechos que se tuvieron como ciertos y acreditados, se realizó una errónea calificación jurídica de los mismos al estimar que vulneraron los derechos privacidad e integridad física y psíquica de los trabajadores que se desempeñan como choferes de camiones. Los hechos que dio por establecido el



[señor] juez de la instancia y respecto de los que se efectuó una errónea calificación jurídica, al considerar que se habrían vulnerado de los derechos fundamentales de privacidad e integridad física y psíquica de los trabajadores, son los siguientes: a. Se comprueba que la instalación del sistema Guardián, culminó a lo menos durante la última semana del mes de enero de 2020 (Considerando 9). b. Que el 24 de agosto de 2020 se ordenó por el tribunal la desconexión del sistema. c. Que dicho dispositivo se encuentra situado sobre el tablero de la cabina de conducción, dirigido hacia el rostro del chofer (Considerando 13). d. Que el sistema está compuesto por cuatro elementos: el primero de ellos es un sensor en la cabina, el cual rastrea el cierre de los ojos y la posición de la cabeza; el segundo de estos corresponde a una cámara orientada hacia adelante (instalación opcional) que captura videos del camino delante del vehículo; el tercero es un motor vibrador que hace estremecerse el asiento cuando se detecta fatiga o distracción; y el último corresponde a un controlador, consistente en un computador al cual el resto de los periféricos se conectan (Considerando 13). e. Se acreditó que tanto el dispositivo GUARDIÁN Gen01 y Gen02 poseen elementos comunes, distinguiéndose uno del otro en los dispositivos de los sensores IR con los que realizan la lectura de los ojos, así como la generación del software que operan los datos (Considerando 15). f. Que la potencia del sensor infrarrojo con que se realiza la lectura de los ojos es de 925 nanómetros (considerando 15). g. Que la luz que emana el dispositivo Guardián, no es perceptible para el ojo humano, por encontrarse en un espectro de longitud de onda superior a setecientos nanómetros. (Considerando 16). h. Que el sensor del sistema emite radiación infrarroja (Considerando 17). i. Que el perito designado en autos concluyó “parcialmente” que el sistema opera en el estado óptimo indicado por el fabricante y bajo lo indicado en la Resolución Exenta N° 3457 e internacional 64271. j. También está como hecho de la causa y basado en la Resolución Exenta N° 3457 el magistrado constató que la radiación infrarroja es absorbida en los medios



acuosos, explicando que “hay mecanismos naturales de defensa (lágrimas, reflejo palpebral, etc.), por lo que una ligera exposición no tiene ningún efecto nocivo para los ojos. Pero sus efectos son acumulativos, así es que sobreexposiciones en una jornada laboral, pero repetitivos durante años, dan lugar a largo plazo a daños en el cristalino. Cuando son fuentes con elevada intensidad (radiación solar, láser, etc.) pueden provocar quemaduras corneales.” (Considerando 17). k. También es hecho de la causa que los choferes de SITRAFOR ejercen sus labores de conducción mediante turnos diurnos y vespertinos, los cuales alcanzan una duración máxima de 14 horas de conducción efectiva, sumadas a las horas de traslado para arribar al camión designado (considerando 19). l. Que al presidente del Sindicato le recetaron gotas lubricantes para los ojos por el médico cirujano Mario Colosso Delgado, el 17 de julio de 2020. (Considerando 20). m. Que a don Gabriel Muñoz, con fecha 7 de marzo de 2020 se le emitió una receta médica para la obtención de lentes. (Considerando 20). n. Que 5 choferes, incluidos los 3 dirigentes sindicales, habrían asistido al mismo psicólogo quien certificó padecimientos físicos y psicológicos por la instalación del sistema Guardián, esto en septiembre de 2020. (Considerando 20). 21 o. Que el prevencionista de riesgos de una de mis representadas no tenía conocimiento de si el sistema Guardián producía o no problemas en los ojos. (Considerando 21). p. Que el sistema Guardián ataca las consecuencias de la somnolencia mas no la causa u origen del mismo, llamada “higiene del sueño” (Considerando 23). q. Que en la diligencia de Inspección personal del Tribunal, al efectuar simulaciones del sistema, este alertó 15 de 22 eventos. (Considerando 25). r. Que no se solicitó autorización a los trabajadores para la implementación del sistema y que los trabajadores carecían del conocimiento adecuado del funcionamiento del sistema (Considerandos 27 y 28). s. Que los reglamentos Internos establecen sanciones en relación al uso del sistema Guardián y que efectivamente algunos trabajadores habían sido sancionados por mal uso del sistema (no por las alertas



propiamente tal), (Considerando 30). t. Que Forestal Arauco tiene conocimiento de cada evento que registre el Guardián, su hora de ocurrencia, locación y placa patente del vehículo en el cual tuvo lugar (Considerando 36).

De los hechos anteriores no resulta posible determinar o calificar que hayan incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores operadores de camiones. En efecto, la denuncia de autos única y exclusivamente se funda en implementación de un sistema que grababa videos 24/7 y audios de lo que ocurría al interior de la cabina, además de infringir su integridad física y psíquica, lo que no es efectivo. Tal como se desprende de los hechos tenidos por acreditados, se está frente a un sistema para prevenir somnolencia y distracción, que efectivamente emite radiación infrarroja, pero en cantidades totalmente segura para la salud humana (como lo confirmó el perito nombrado en autos), y en el caso hipotético que pudiera producir un daño, sería después de años. Por ello, utilizar la prueba de los demandantes, obtenida en un numero ínfimo en relación a los socios del sindicato y después de solo 6 meses instaurado el sistema, no puede vincularse al dispositivo, menos si el propio sentenciador tuvo por acreditado que, de producirse daños, estos se producirían después de años (a pesar que el perito dijo que ello no era así). Por ello es que, concluir una vulneración a la integridad física de la prescripción de gotas para los ojos secos en julio de 2020 y de la prescripción de lentes en marzo de 2020 es errado, pues esta prueba no puede vincularse a la instalación del sistema ocurrido en diciembre de 2019 y enero de 2020, lo anterior por un tema puramente temporal. Así, concluir que en base a estos dos indicios una vulneración a la integridad física es errada. Lo mismo ocurre con los relatos ante el psicólogo acompañado en autos, practicado a solo meses de la interposición del sistema. Se tuvo por acreditado que los daños graves a los ojos de las personas solo se producen por rayos láser y radiación solar, y estos no emanan del sistema Guardián. Es necesario reiterar que el perito designado en la causa señaló expresamente que el



sistema funcionaba bajo parámetros óptimos y bajo lo indicado en la Resolución Exenta N° 3457 e internacional 64271. Por consiguiente, de tal pericia solo puede concluirse que el sistema no produce daños. Se trata de un sistema, como dice la sentencia al reproducir al perito que opera bajo la resolución N° 3457, y que podría -potencialmente en ciertos casos no acreditados en autos- después de años de uso y de manera prolongada, producir algún tipo de daño, daño que, en este caso – de existir- sería menor por cierto, pues se tuvo por acreditado que los daños graves solo los producen los laser y la radiación solar, que no es el caso. El hecho que un sistema permita, potencialmente y bajo ciertos supuestos no acreditados en autos, que se produzca un daño, después de años, no implica la existencia de una vulneración a la integridad física de los trabajadores consagrada en el artículo 19 N° 1 de la C. P. E., menos si dicha medida no se concreta, y es imposible que a la fecha se haya concretado si el sistema no lleva operando siquiera un año. Es así que se ha condenado de tutela por vulneración de derechos fundamentales a la empresa por implementar un sistema de seguridad- el más moderno y costoso en la actualidad – sistema que el experto en la materia designado por el tribunal concluyó que operaba dentro de norma en términos lumínicos, y lo hizo en base a una receta para gotas de ojos secos y una receta de lentes, la que no pueden vincularse al sistema, por un tema temporal. Así, la vulneración no tiene asidero en materia de vulneración de derechos fundamentales.

Por otro lado, y en relación a la vulneración a la integridad psíquica, en autos se acreditaron dos hechos, que los trabajadores no autorizaron expresamente el sistema y que estos desconocían a cabalidad cómo funcionaba el sistema. En base a estos hechos, el sentenciador los calificó y llegó a la conclusión de que esta incertidumbre acarrea una vulneración a la integridad psíquica. Esta conclusión jurídica resulta a todas luces excesivas, y sobre todo, si ningún hecho o vulneración concreta se probó en autos. Lo único probado fue esta incertidumbre, pero ello no logró generar vulneración





como la decretada en autos. Es decir, se acredita una omisión, mas no una acción vulneratoria concreta. Olvida el sentenciador que, en materia de elementos de protección de higiene y seguridad, implementados de cara a evitar accidentes, no se requiere consentimiento del trabajador. Por otro lado, el desconocimiento no implica vulneración, criterio errado, ya que toda política de prevención de riesgo y seguridad de una empresa es una manifestación de su poder de dirección que está orientado a cumplir con su obligación contemplada en el artículo 184 del Código del Trabajo. Una de las manifestaciones de dicho poder es la denominada “potestad de reglamentación”, con miras a prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo. El reglamento interno de higiene y seguridad, como producto del poder de dirección, emana de la voluntad del empleador, pero que no requiere el consentimiento del trabajador para implementarse. Por tales motivos, resulta completamente errado desde el punto de vista jurídico, que [el señor] juez califique como una falla de implementación del sistema, la falta de consentimiento de trabajadores respecto a su puesta en marcha. Incluso, se rechazó la vulneración a la honra, esto pues se logró acreditar que el sistema no busca grabar a los choferes y los videos que efectivamente capta el sistema son solo de eventos concretos y duran 1 a 5 segundos y sin audio. Solo se ha perseguido un objetivo: La protección de la vida de los trabajadores. Tampoco resulta de acuerdo a derecho calificar que esas recurrentes vulneraron los derechos fundamentales de los trabajadores a la privacidad por enviar datos concretos de los eventos a Forestal Arauco, como lo son hora de ocurrencia, locación y placa patente del vehículo, es decir, datos de eventos sin mención a trabajadores en concreto, datos neutros que no afectan derecho alguno de la personalidad de los choferes. Por lo que concluir que del envío de estos datos se produzca una vulneración a la intimidad, es evidentemente excesivo y desproporcionado.

Sin perjuicio de lo anterior, lo relevante era el juicio de proporcionalidad, es decir, la conclusión jurídica respecto a si la



implementación y uso del sistema Guardián era necesario, justificado y proporcional. El inciso 3° del Artículo 485 del Código del Trabajo establece que: “Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.” La doctrina ha señalado que de su redacción emana el juicio de ponderación que debe hacer el sentenciador, que en este caso fue también errado, al respecto se señala: “...sugiriendo que cada uno de los sub principios que conforman la ponderación son recogidos por la redacción del artículo 485 CT., así: i) el juicio de idoneidad se encuentra referido al control de adecuación de la medida, esto es, que no sea “arbitraria”; ii) el juicio de necesidad alude a que la medida que vulnera el derecho constitucional no se ejerza “sin justificación suficiente”; y iii) el juicio de ponderación en sentido estricto, se recoge en la expresión “que la medida no sea desproporcionada”. Esta tesis se ve fortalecida con la regla del “alivio probatorio” que se concede al trabajador según lo dispone el artículo 493 del Código del Trabajo, que impone al empleador demostrar la “proporcionalidad” de las medidas que se estiman lesivas de los derechos constitucionales del trabajador...” según cita que hace de Mella Cabrera, Patricio y Domínguez Montoya, Álvaro (2012), “Conflicto de derechos constitucionales y juicio de tutela laboral en Chile: Estado doctrinal, legal y jurisprudencial” Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXIX (Valparaíso, Chile, 2012, 2do Semestre)[pp. 177 - 219]. Se trata de uno de los sistemas de detección de somnolencia y manejo distraído más moderno del mundo, cuyo objetivo es prevenir accidentes en carretera, atendido el volumen de los camiones y el peso de su carga, en su mayoría fatales, por lo que es evidente que el Sistema Guardián resulta idóneo, necesario y proporcional en relación al bien jurídico que protege, la vida de los trabajadores. El hecho que el sistema de



seguridad ataque la consecuencia y no la causa base no es relevante, es absurdo y no tiene cabida en el derecho.

En lo que dice relación con las **peticiones concretas** del recurso de nulidad, solicita que esta Corte de Apelaciones, conociendo de los vicios alegados:, lo acoja revoque la sentencia definitiva de 17 de abril de 2.021, debido a que ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, y proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, en que se rechace la denuncia de vulneración de derechos fundamentales interpuesta en su contra. En subsidio, se invalide la sentencia recurrida, por haber incurrido en la causal de nulidad del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, acoger el recurso de nulidad, declarar que la sentencia recurrida es nula y proceder a dictar la sentencia de reemplazo correspondiente que rechace la denuncia de vulneración de derechos fundamentales interpuesta en su contra.

**Octavo: Que en lo relativo a la primera y principal causa de invalidación -artículo 478 letra b) del Código del Trabajo-**, por haber sido la sentencia “pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica”, la reclama en atención a que en su concepto, ninguno de los medios de prueba, por sí o en conjunto, permiten razonablemente llegar a las conclusiones que estableció el señor juez de mérito, sea por la naturaleza de ellos, ya que emanan de la propia parte y que reiteran las imputaciones que señala la denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Lo anterior resulta contrario a la lógica, específicamente a la razón suficiente, al tener por acreditado una vulneración a la integridad física con solo una receta médica de gotas para los ojos de un miembro del sindicato y una prescripción de lentes por parte de un técnico a otro de los afiliados, cuando existen las mismas razones para que ello no sea atribuible al sistema Guardián. El sentenciador dice que “sus trabajadores” requirieron atención médica, cuando lo cierto es que son solo 2 trabajadores de más de



100. Así, la conclusión no tiene razón de ser. La cita de los principios de la primacía de la realidad y de in dubio pro operario puso en evidencia que el [señor] juez carece de argumentación para llegar a la conclusión anterior.

**Noveno:** Que luego de una reiterada y majadera insistencia en aquellas ideas del arbitrio, los recurrentes no lograron explicar la forma en que las supuestas infracciones atentaron contra la razón suficiente en el desarrollo de los fundamentos considerados por el órgano jurisdiccional, tratando de cuestionar el mérito de los elementos probatorios, así como el proceso dialéctico que se empleó para ello, sin que haya logrado cuestionar la validez, legalidad y origen de aquellos, tratando de otorgarle un mejor valor a los antecedentes aportados por esa parte, mismos que no pasaron por el principio de la contradicción, ya que sólo se trató de instrumentos que se refieren a las bondades de un producto determinado, sin ratificación en estrados; y, en especial, la mencionada Resolución N° 3457 del Ministerio de Salud habla con toda precisión sobre la existencia de un daño acumulativo, cuestión no contradicha en sus argumentaciones por los recurrentes, que sólo alegaron que por el poco tiempo transcurrido, no era posible determinar aquella afectación a la integridad física.

En aquel análisis probatorio del señor juez de la causa, no hubo error en la valoración de la prueba, muy por el contrario, ese proceso tuvo plena coherencia con su mérito y su origen, la forma de ser incorporada al juicio y el valor que debe otorgársele a la misma, en relación a la garantía constitucional que fundó la denuncia de tutela, y en que basta el amago o condiciones favorables para que se produzca la afectación de la garantía para recurrir en resguardo de ese derecho fundamental.

La prueba de los demandados debió establecer la total inocuidad del sistema que pretendió emplear como medida de seguridad, sin dejar espacio a la duda y menos, que acepte como válido que la posibilidad de que el daño pueda producirse a largo tiempo, el que no



ha transcurrido y por ende, estimar, que por ahora, no existe riesgo a la salud de los conductores.

El reparo de los recurrentes en contra del órgano jurisdiccional sobre la fijación del porcentaje de aciertos en los eventos que se pretendían evitar con el método implementado y que constató en la diligencia de inspección personal del tribunal, además de ser intrascendente para la decisión del caso, sólo debe estimarse como la verificación de que el citado método no reúne una fiabilidad que otorgue plena seguridad a los trabajadores como a los demás conductores, cuestión de suyo importante, si lo que se pretende es resguardar la integridad física y la vida de los trabajadores.

**Décimo:** Que los recurrentes de este acápite alegaron en forma ***subsidiaria, la causal de nulidad del artículo 478 letra b) [del Código del Trabajo]***, errónea calificación jurídica de los hechos; misma que como bien lo dejaron establecidos estos recurrentes, “... *tiene un límite, ya que no se puede “modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior...”*”.

Luego de señalar los hechos que el señor juez de mérito tuvo por acreditados, afirmó que no resulta posible determinar o calificar que hayan incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores operadores de camiones. La denuncia se funda en la implementación de un sistema que grababa videos 24/7 y audios de lo que ocurría al interior de la cabina, además de infringir su integridad física y psíquica, lo que no es efectivo. Se está frente a un sistema para prevenir somnolencia y distracción, que efectivamente emite radiación infrarroja, en cantidades totalmente segura para la salud humana, y en el caso hipotético que pudiera producir un daño, sería después de años.

Como ya se razonó precedentemente por esta Corte, lo relevante la existencia de un amago o amenaza a garantías constitucionales, cuya jerarquía no puede ser discutida, menos aún si se está frente a la integridad física y vida de los trabajadores que ocupa el N° 1 del artículo 29 de la Carta Magna, cuya naturaleza,



además, requiere de los resguardos que ese cuerpo legal como las leyes laborales reconocen a los trabajadores, en tal calidad, debiendo adoptar las medidas jurisdiccionales que pongan pronto remedio a aquella amenaza que pueda, potencialmente, producir un mal y que pueda llegar a afectar a aquellas.

Si bien debe reconocerse que la finalidad del empleo de medidas de seguridad que beneficien a los trabajadores, a terceros e incluso a los empleadores, -sobre todo en cuanto a su responsabilidad legal-, tiene fundamento en el ordenamiento jurídico, no puede sobrepasar las garantías que se reconocen a los principal, directa y primeramente afectados, como son los servidores de los recurrentes, y que constituyen el núcleo de la Carta Magna, lo que amerita no sólo el reconocimiento de ellas, sino su efectiva protección y amparo.

Por ello, que el juicio de proporcionalidad que alegaron los recurrentes, sobre la conclusión jurídica respecto a si la implementación y uso del “Sistema Guardián” era necesario, justificado y proporcional, no tiene fuerza ante el rango del que gozan los derechos objeto de esta acción de tutela. Afectados, amenazados, amagados o insinuados algún tipo de atentado en contra de esos derechos, las demás facultades y obligaciones legales deben ser analizadas a la luz del rango de ellos, sus efectos y su naturaleza, de los que debe fijarse su mayor y mejor protección, más allá del ejercicio de las facultades del empleador, en especial, del uso de uno los sistemas de detección de somnolencia y manejo distraído más moderno del mundo, conforme lo alegan los recurrentes.

Por lo anterior, el recurso en análisis debe ser desestimado.

**C) En cuanto al recurso de nulidad de “Forestal Arauco S.A.”.**

**Décimo primero:** Que aquella “Forestal” dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva fundado en primer término, en la causal de nulidad del **artículo 477 inciso 1° en relación al artículo 183-A del Código del Trabajo**, esto es, infracción de ley, que influyó en lo dispositivo del fallo. Declaró la existencia de un régimen



de subcontratación con las sociedades principalmente denunciadas “Sociedad De Transportes Maguillines Limitada”, “Transportes San Joaquín Ltda.”, “Empresa de Transportes El Diamante Ltda.”, “Sociedad de Transportes Carmar Ltda.”, “Estela Espinoza Jaque Y Cía. Ltda.”, “Sociedad Forestal Lage y Compañía Limitada”, con “Forestal Arauco S.A.”, en circunstancias que no se cumplían con los requisitos para declarar dicho régimen.

Afirma que esa parte reconoció la existencia de contratos comerciales con las empresas antes indicadas, éstos no configuraban un régimen de subcontratación pues: a) Existía independencia y autonomía en la dirección por parte de las empresas transportistas, al momento de prestar los servicios. b) No existía exclusividad en la prestación de los servicios contratados. Sin embargo, el Tribunal declaró la existencia del trabajo en régimen de subcontratación, citando literalmente los motivos cuadragésimo, sobre los servicios ejecutados por las denunciadas principales en favor de dicha sociedad, y tiene por establecido el requisito para la subcontratación; el motivo cuadragésimo primero, la exigencia de “Forestal Arauco S.A.” a las empresas adjudicatarias de servicios, que se encuentren inscritas en el registro de FASA (Forestal Arauco S.A.): RYCE, otorgándoles un plazo de veinte días, para que se inscriban en caso de no haberlo hecho, teniendo como sanción no adjudicarles la licitación, lo que conllevó a concluir que existe un régimen de subcontratación argumentado por la denunciante. Por su parte, en el punto N° 19 de dichas bases, referentes al “contrato de prestación de servicios”, se incorporaron una serie de documentos que la prestadora de servicios declaró conocer y aceptar, los que describe pormenorizadamente. Reproduce el fundamento cuadragésimo segundo, sobre la exigencia de esa parte a sus transportistas para tener instalado un sistema de combate de somnolencia y/o distracción como lo es el Sistema Guardián, lo que lo exige como condición para contratar. En base a lo anterior, el sentenciador concluyó que al no utilizar tal dispositivo, trae aparejada la imposibilidad de prestar



servicio por parte de las empresas denunciadas a “Forestal Arauco S.A.”, por lo que ésta ejerce facultades de dirección sobre dichas empresas. Además, dichas directrices no se agotan con la utilización del dispositivo Guardián, sino que dentro de la cabina de conducción existe otro dispositivo requerido por “Forestal Arauco S.A.” para efectuar dicha labor, denominado “Fores Truck”, que tiene por finalidad marcar las rutas de conducción de los choferes, alertando sonoramente de las reducciones de velocidad existentes en la ruta, y que deben ser respetadas por los conductores. Invoca el considerando cuadragésimo tercero, sobre la conclusión que concurren los presupuestos del artículo 183–A del Código del Trabajo.

De los considerandos transcritos, el vicio de infracción de ley resulta evidente, pues el Tribunal de la instancia declaró el régimen de subcontratación al determinar que existían facultades de dirección de “Forestal Arauco” sobre las demandadas principales, principalmente por la mera instalación del sistema “Guardián”, así como también el denominado sistema “Forestal Truck”, en las cabinas de los camiones.

Alega que no rechaza las conclusiones fácticas arribadas por el Tribunal, pero sostiene que se cometió el vicio de infracción de ley al encuadrar tales consideraciones fácticas la existencia de un trabajo en régimen de subcontratación entre los dependientes de las demandadas principales y “Forestal Arauco S.A.” sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma legal del artículo 183-A citado. Su representada exigía a las prestadoras del servicio de transporte que implementaran en sus camiones medidas de seguridad, esto era netamente por una cuestión comercial, a saber, la seguridad de la mercadería y productos de la empresa. Lo anterior, independiente de que a su vez se resguardaba la integridad y vida de los conductores y de terceros que circulan por las carreteras de Chile. Se trata de un estándar técnico mínimo que se exige a quienes les prestan servicios de transporte de carga.

Estima que no resulta plausible que la exigencia de un estándar técnico de, en general, los equipos o herramientas de trabajo de un





prestador para con su cliente sea motivo, per se, de calificación de un régimen de subcontratación. La independencia y autonomía en la prestación misma del servicio, a saber, cómo las transportistas transportaban las mercaderías; con qué conductores; en qué turnos; etc., no era una cuestión de su injerencia. El Tribunal debió analizar una dirección en las labores ejecutadas por el contratista o subcontratista, más no sí existían facultades de control por su parte. Lo relevante era determinar si existía un trabajo continuo y permanente, en donde un grupo de trabajadores (empleados de la supuesta contratista) prestaban servicios únicamente para “Forestal Arauco S.A.” y en donde esta empresa tenía facultades de dirección en la forma en que el servicio era prestado, y respecto de que los se podía decir que trabajaban bajo régimen de subcontratación. La existencia de medidas de resguardo a tomar en el transporte de los productos de su representada no era un factor relevante, menos determinante, para configurarse o no el trabajo en régimen de subcontratación.

A su vez, el Tribunal de la instancia no analizó la circunstancia de que no existía en los servicios contratados una exclusividad entre las partes. Lo anterior, pese a que la exclusividad en la prestación de los servicios ha sido otro elemento que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para determinar la existencia o no del trabajo en régimen de subcontratación. Las empresas de transporte demandadas prestan servicios a otros clientes distintos a “Forestal Arauco”, no existe exclusividad en los servicios comerciales que presta las demandadas principales en su favor. “Forestal Arauco” no usaba solamente los servicios de estas empresas para el transporte de sus maderas y por el contrario utiliza los servicios de otras empresas transportistas para efectos de distribuir maderas. Así está expresamente pactado en la cláusula segunda del instrumento suscrito por las partes.

Sostiene que se debía analizar si el transporte de insumos de madera que prestaban algunas de las empresas demandadas principal



para “Forestal Arauco” podría configurar el trabajo en régimen de subcontratación, citando jurisprudencia al efecto.

***En subsidio, alega la causal de nulidad del artículo 477 inciso 1° en relación a los artículos 183-B y 183-D,*** respecto de los artículos 485 y 5° inciso primero del Código del Trabajo. Estima que el tribunal a quo dictó la sentencia de la instancia con infracción de ley, que influyó en lo dispositivo del fallo, ya que fue condenada por vulneración de derechos fundamentales de manera solidaria, en circunstancias que dicha sanción no se encuentra contemplada en el artículo 183-B del Código del Trabajo. No corresponde que se condene por tutela durante la relación laboral, establecida en el artículo 485 del Código del Trabajo, a la empresa principal o dueña de la obra o faena, por lo que al hacerlo se produce una errónea interpretación de la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 183-B del Código del Trabajo.

El vicio se dio en la parte resolutive de la sentencia, cuando se declaró la vulneración de derechos fundamentales, pero extendiéndola a la demandada solidaria “Forestal Arauco S.A.”, lo ***que infringe el artículo 485*** como el artículo 183-B del Código del Trabajo. En la primera norma sobre esta vulneración en el ejercicio de las facultades de dirección de la empresa mandante en un régimen de subcontratación, de manera tal que se excede -e infringe- la norma antes transcrita cuando se declara que es también la empresa principal (en régimen de subcontratación) quien vulnera los derechos fundamentales de los dependientes de la contratista. El único sujeto activo en el cumplimiento de los derechos fundamental respecto de los trabajadores es su empleador, según lo dispone el inciso primero del artículo 5° el Código del ramo, que transcribe. No podría ser de otra manera, puesto que la infracción de una garantía o derecho fundamental en el ámbito del trabajo, sólo se puede provocar dentro de un vínculo jurídico de trabajo dependiente y por ende, de naturaleza bipartita entre un empleador y un trabajador, en los términos de lo dispuesto en el artículo 3° del citado Código, vínculo



contractual que es diverso a las relaciones jurídico-laborales trilaterales, como es la subcontratación, máxime si en este tipo de vínculos tripartitos, es requisito esencial la dependencia del trabajador subcontratado para con el empleador contratista, cuestión que en este litigio no se ha alegado por la denunciante. También debe atenderse el tenor del artículo 183-B del Código del Trabajo, que dispone que la empresa principal deba responder solidariamente por las obligaciones de dar a que estaba obligado el contratista. La norma establece que la empresa principal responde respecto de las obligaciones de hacer o no hacer, como sería respetar, en el ejercicio de las facultades de mando del empleador, los derechos fundamentales de sus trabajadores. La única obligación de hacer que pesa sobre la empresa principal respecto de los trabajadores subcontratados es la de velar por el cumplimiento del deber de protección de la salud y vida de los trabajadores en régimen de subcontratación, conforme lo dispone el artículo 183-E del Código Laboral, más no responde por otra conducta, menos si no es la mandante, como es velar por un derecho fundamental propio de un vínculo de trabajo regido por el artículo 7° del Código y no por uno regido por el artículo 183-A. Por ello, por medio de su sentencia, el juez de la instancia crea una responsabilidad legalmente inexistente.

En relación con los dos vicios expresados previamente (uno en subsidio del otro), es una errónea interpretación y aplicación de las normas invocadas, esto es, del artículo 183-A del Código del Trabajo, al declararse un trabajo en régimen de subcontratación. No desconoce que exigía contractualmente que el proveedor del servicio de transporte de insumos contara en sus camiones con mecanismos de seguridad, pero tal cuestión era principalmente a modo de resguardar sus productos, independiente de que también tal sistema protegía a los trabajadores de las empresas demandadas principales. Se trató de una de las condiciones o estándares técnicos exigibles por “Forestal Arauco” respecto de sus prestadores de servicios de transporte. Sin embargo, tal cuestión no era suficiente para resolver que mi



representada tenía sobre los proveedores facultades de dirección y, en definitiva, la existencia de un régimen de subcontratación entre las demandadas principales y ésta. Infringió lo anterior, lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del Trabajo, no consideró otros requisitos legales, como la independencia de los proveedores del servicio sobre la forma y el cómo realizaba sus funciones de transportes. Tampoco se acreditó que se cumplía con el requisito de la exclusividad en los servicios.

***En subsidio, alega la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 183-B y 183-D, en relación con el artículo 485 y 5, inciso 2° del Código del Trabajo, al declararse en la sentencia definitiva que “Forestal Arauco” vulneró los derechos fundamentales de los choferes del Sindicato denunciante. Esa infracción legal se origina por cuanto la obligación de responder en forma solidaria que afecta al dueño de la obra -en el caso sub-lite “Forestal Arauco”- se circunscribe única y exclusivamente a las obligaciones laborales y previsionales de dar y a las indemnizaciones por término de contrato establecidas por la legislación laboral a favor del trabajador en el artículo 183-D del Código del Trabajo. Cita el artículo 183-D del Código del Trabajo y afirma que no se comprenden aquellas cuyo origen es la declaración de vulneración de derechos fundamentales, la que se genera por una infracción a una obligación de hacer (resguardar los derechos fundamentales del trabajador) o no hacer (no infringir los derechos fundamentales de los trabajadores). Luego, resulta improcedente extender las sanciones y/o medidas reparativas por una infracción a esta obligación de hacer o de no hacer a “Forestal Arauco”. La declaración de vulneración de derechos fundamentales corresponde a una institución cuya naturaleza jurídica es sancionatoria, y, por lo tanto, las normas que regulan dicha sanción deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva al ser normas de excepción, no siendo procedente su interpretación extensiva o bien su aplicación por analogía a casos no expresamente previstos por la ley.***



Señala que resulta ilustrativo que el legislador, en el artículo 183 D) del Código del Trabajo, necesitó hacer mención expresa de las eventuales indemnizaciones legales que corresponden por el término del contrato de trabajo, para así incluirlas en el ámbito de responsabilidad de la empresa principal. A mayor abundamiento, la indemnización a que fue condenada en su calidad demandada solidaria corresponde a una que no se genera por el término del contrato de trabajo, pues nos encontramos frente a una denuncia de tutela con la relación obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral. Esto hace evidente que se vulnera el artículo 183-B del Código del Trabajo (en relación con el artículo 183-D del mismo Código), pues, al señalar expresamente la ley cuáles serían las indemnizaciones a que podría ser condenada la empresa principal, precisa que son aquellas por el término del contrato de trabajo, y, en el caso de marras, no se demandó ninguna indemnización de este tipo. Es más, la indemnización que ordenó pagar es a título de reparación de la vulneración constatada. Entonces, no se divisa sustento jurídico alguno para afirmar que una norma sancionatoria como lo es el artículo 485 del Código del y la obligación impuesta al empleador en el artículo 5° inciso 1° del mismo texto legal, en cuanto a que el poder patronal debe resguardar y garantizar las prerrogativas constitucionales de los ciudadanos-trabajadores dentro de la empresa, pueda resultar aplicable al dueño de la obra o faena- empresa principal- cuyo régimen de responsabilidad quedó regulado y minuciosamente acotado en el Título VII Párrafo 1° del Libro 1 del citado Código, relativo al régimen de subcontratación. En este entendido, cabe recordar que las sanciones, en general, están sujetas rigurosamente al principio de legalidad y son de derecho estricto.

***En subsidio lo anterior, levantó la causal de nulidad del artículo 478 letra E) del Código del Trabajo, que cita. Del petitorio de***



la demanda, el denunciante solicitó que se declarara que las demandadas principales vulneraron los derechos fundamentales que denunciaba, según el tenor que transcribe de esa parte de la denuncia y en que el Sindicato denunciante no solicitó que se declarara que “Forestal Arauco” había vulnerado los derechos fundamentales que indicaba, sino sola y exclusivamente respecto de las empresas demandadas principales. El Tribunal de la instancia declaró que “Forestal Arauco S.A.” vulneró, junto con las demandas principales, los derechos fundamentales denunciados. El Tribunal dictó sentencia otorgando más allá de lo pedido por la parte denunciante, esto es, incurriendo en el error de ultra petita, razón por la cual se interpone subsidiariamente a todo lo anterior esta causal de nulidad (artículo 478 letra e del Código del Trabajo).

Afirma que las infracciones denunciadas, una en subsidio de la otra, influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de la siguiente forma: 1) Infracción de ley, en conformidad con el artículo 183-A del Código del Trabajo, por cuanto se ha interpretado de manera errónea el artículo 183-A, ya que determina un trabajo en régimen de subcontratación inexistente al interpretar y aplicar equivocadamente la norma conforme a lo expuesto, lo que genera para mi representada la obligación de pagar solidariamente conceptos que por ley no le corresponde pagar, afectándolo sustancialmente. 2) En subsidio, infracción de los artículos 183-B y 183-D, en relación al 485 y 5° inciso primero, todos del Código del Trabajo, por cuanto se ha interpretado y aplicado de manera errónea el artículo 183-B y 183-D, ya que se declaró que esa parte había vulnerado, en conjunto con las demás empresas demandadas, los derechos fundamentales de los conductores afiliados al Sindicato denunciante, obligándola a pagar la suma de 40.000.000, a título de reparación de la vulneración constatada, sanción e indemnización no incluidas dentro de la responsabilidad de la empresa mandante. 3) En subsidio, sentencia dictada con el vicio de ultra petita, esto es, otorgar más allá de lo pedido por las partes, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del



fallo, por cuando declaró que “Forestal Arauco S.A.” había vulnerado los derechos fundamentales indicados en la demanda de autos, en conjunto con los demás denunciados, lo que le genera una serie de sanciones (contratación pública con el Estado), declaración que no había sido solicitada respecto de mi representada en el petitorio de la demanda.

Esa parte recurrente solicita que se acoja el recurso de Nulidad, anulando la sentencia definitiva de 17 de abril de 2021, en todas sus partes, debido a que la misma ha sido pronunciada con infracción de ley o, en subsidio, con vicio de ultra petita y proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, la cual: 1) Declare que no existe régimen de subcontratación entre su representada y las demás empresas demandadas, por no cumplirse en la especie con los requisitos legales establecidos en el artículo 183-A del Código del Trabajo. 2) En subsidio, declare que, pese al régimen de subcontratación, no procede que se condene a la empresa principal por vulneración de derechos fundamentales ni, en consecuencia, al pago de indemnización reparatoria por tal vulneración, al ser ésta una figura y sanción que persigue la responsabilidad exclusiva del empleador cuando éste, excediéndose de sus facultades legales, infringe garantías constitucionales de sus dependientes. Además, por no encontrarse dentro del margen de responsabilidad de la empresa principal, conforme establecen los artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo. 3) En subsidio de lo anterior, declarar que la vulneración de derechos fundamentales únicamente respecto de las demandadas principales y no en contra de “Forestal Arauco”, al no haber sido solicitada en el petitorio de la denuncia de autos.

**Décimo segundo:** Que en lo relativo a la *primera causa* de invalidación que alegó la “Forestal Arauca S. A.”, del **artículo 477 inciso 1° en relación al artículo 183-A del Código del Trabajo**, esto es, infracción de ley, que influyó en lo dispositivo del fallo y en que declaró la existencia de un régimen de subcontratación con las sociedades principalmente denunciadas, en circunstancias que no se



cumplían con los requisitos para declarar dicho régimen, según su parecer.

**Décimo tercero:** Que como primera cuestión que debe dejarse asentada para la resolución de esta materia, se debe tener en consideración que en parecer de esta Corte, -errónea aplicación del derecho-, el recurrente no puede alterar los hechos establecidos en la sentencia, pues ella tiene sólo por objeto fijar el recto sentido o alcance de las normas legales que se dicen afectadas, ya sea porque se desatienden en un caso previsto por ellas, cuando en su interpretación el juez contraviene fundamentalmente su texto o cuando les da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones.

En el presente caso la sentencia definitiva, en lo que dice relación con la existencia del objeto litigioso planteado en el juicio, a sentencia recogió el debate de las partes sobre la existencia del régimen subcontratación con las sociedades principalmente demandadas con esta recurrente, determinando en los motivos 39° a 42°, estableciendo los hechos sobre la materia y fijando como sustrato fáctico, los siguientes elementos: que los dependientes trabajan para un empleador, denominado contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo; la existencia de un vínculo contractual entre dichas denunciadas principales y “Forestal Arauco S.A.”; que ésta exige a las empresas adjudicatarias de los servicios prestados en su beneficio, que se encuentren inscritas en el registro de FASA (Forestal Arauco S.A.): y que en caso de no hacerlo se tiene como sanción no adjudicarles la licitación, o bien, declararla desierta; que puede exigir otros estándares o procedimientos que la autoridad o FASA determine conveniente conocer y/o emplear; también exige a sus transportistas que tengan instalado un sistema de combate de somnolencia y/o distracción como lo es el Sistema Guardián, condición para contratar y que al no utilizar tal dispositivo, así como el resto de los requerimientos específicos, trae aparejado como consecuencia la





imposibilidad de prestar dicho servicio por parte de las empresas denunciadas.

Con esos antecedentes fácticos antes descritos, el tribunal de mérito concluyó que “Forestal Arauco S.A.” ejerce facultades de dirección sobre dichas empresas, pues los lleva a modificar sus camiones de modo tal, que se ajusten a los requerimientos específicos impuestos por ésta.

**Décimo cuarto:** Que los elementos antes señalados – inmodificables para esta Corte-, cumple con los requisitos que se establece el artículo 183-A del Código del Trabajo, en cuanto los integrantes del Sindicato que compareció en la denuncia, en tanto trabajadores, prestan servicios para sus empleadores, quien mediante un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o prestar servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona, natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena, excluyéndose solamente las obras o servicios que se presten de manera discontinua o esporádica, según lo regula el artículo 183-A del Código del Trabajo.

Esos elementos, son de suficiencia jurídica para establecer la prestación de servicios en régimen de subcontratación, sin que los pretendidos requisitos de independencia y autonomía en la dirección por parte de las empresas transportistas, como la falta de exclusividad en la prestación de los servicios contratados por “Forestal Arauco S. A.”, sean requisitos exigibles en el texto legal.

Sin perjuicio de lo anterior, los demandados principales no gozaban de independencia ni de autonomía, debiendo cumplir con los requisitos técnicos, contractuales y de dirección de esas empresas, que de no ser cumplidas, podían significar la aplicación de sanciones tanto al contratista como al trabajador que podría traer aparejados el término del vínculo entre las empresas a título de sanción y por ende, de los trabajadores que prestaban los servicios en favor de los primeros. En ese punto, debe resaltarse de manera especial, que la activación del sistema de alarma empleado en los vehículos de carga



era reportada, en primer lugar, a “Forestal Arauco S.A.”, cuestión que establece la facultad de control y dirección de ésta sobre los trabajadores contratados por los demandados principales. La vinculación contractual entre estos y aquella, permitía el control eficaz sobre los trabajadores, por parte de la demandada solidaria, conforme a la posición predominante de la empresa principal, y le permitía mantener el control sobre la eficacia de los sistemas de alerta, recibiendo los antecedentes necesarios para vigilar la eficacia de los mismos. Precisamente, el beneficiario final de los servicios, las exigencias capaces de imponer la forma de ser recibidos los servicios, afectando incluso a los trabajadores, sea en cuanto a los requisitos, modos y naturaleza de aquellos, los que permitieron al señor juez de mérito arribar a las conclusiones que jurídicamente, no son cuestionables desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.

En aquellas circunstancias, la causal de invalidación por este rubro debe ser desestimada.

**Décimo quinto:** Que respecto de la segunda motivación de nulidad que levantó “Forestal Arauco S. A.”, en forma subsidiaria a la primera, consistente en la **causal de nulidad del artículo 477 inciso 1° en relación a los artículos 183-B y 183-D**, respecto de los artículos 485 y 5°, inciso 1° del Código del Trabajo, debe dejarse asentado que por la causal e estudio, los hechos establecidos por el señor juez de mérito, son inmodificables para esta Corte, mismos que fueron descritos precedentemente.

El fundamento de la causal es que fue condenada por vulneración de derechos fundamentales, en circunstancias que dicha sanción no se encuentra contemplada en el artículo 183-B del Código del Trabajo y a la que podría ser condenada la empresa principal, son aquellas que nacen por el término del contrato de trabajo en que no se comprenden aquellas cuyo origen es la declaración de vulneración de derechos fundamentales, la que se genera por una infracción a una obligación de hacer (resguardar los derechos fundamentales del trabajador) o no hacer (no infringir los derechos fundamentales de los



trabajadores). Luego, resulta improcedente extender las sanciones y/o medidas reparativas por una infracción a esta obligación de hacer o de no hacer a “Forestal Arauco”

**Décimo sexto:** Que las normas jurídicas invocadas por aquel recurrente, dejan en claro que las obligaciones de la empresa principal guardan relación con la totalidad de las obligaciones laborales y previsionales, incluidas las legales por el término de la relación laboral, es decir, comprende la totalidad de los derechos de los trabajadores, sea durante la vigencia de la relación laboral, sea al término de la misma; fijando una responsabilidad menos rigurosa para el caso que se haya hecho uso por la empresa principal del derecho a ser informada y de retención en su caso, reiterando el artículo 183-D del cuerpo legal pertinente, la responsabilidad que le compete a la empresa principal de las obligaciones laborales y previsionales, incluidas las eventuales indemnizaciones por el término de la relación laboral. No existe restricción sobre la responsabilidad de la empresa principal, en relación a los recurrentes, debiendo soportar la responsabilidad como empleador, por estar reconocido en su favor el derecho a repetir en contra de los comparecientes finales de las reparaciones indemnizatorias fijadas en favor de los ofendidos.

Por lo razonado anteriormente, el recurso de nulidad de “Forestal Arauco S. A.” será desestimado en este capítulo.

**Décimo séptimo:** Que la segunda causal subsidiaria (y tercera que se esgrimió por esta recurrente) sobre afectación del artículo 485 del Código de la especialidad, porque el artículo 485 del Código del Trabajo sólo hace responsable de la afectación de derechos constitucionales al empleador directo de los recurrentes, encontrándose exenta de responsabilidad por su carácter de empresa principal.

**Décimo octavo:** Que sobre esa materia, debe tenerse presente que la responsabilidad de la empresa principal está reconocida respecto de la totalidad de los derechos de los trabajadores, sin distinguir en su tenor, entre contratistas y empresas principales, como por el principio protector de los trabajadores del Derecho Laboral.



Tampoco existe, como lo pretende la recurrente, ninguna distinción respecto de la naturaleza de las obligaciones en favor de los trabajadores para hacer responsable a la empresa principal, la obligación de ésta abarca la universalidad de los derechos laborales, sin discurrir sobre una diferencia entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer que pueda eximirla válidamente de la afectación de derechos constitucionales durante la vigencia y término de la relación laboral. Si además, es la receptora final de los servicios de los recurrentes, ejerciendo facultades de dirección y control en el cumplimiento de ellos, queda igualmente obligada a la protección de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento jurídico en favor de todas las personas.

Por ello, esta segunda causal será igualmente desestimada.

**Décimo noveno:** Que en relación a la cuarta motivación de invalidación (presentada como tercera subsidiaria), del **artículo 478 letra E)** del Código del Trabajo, esto es, omisión de los requisitos de la sentencia, ya que el Sindicato denunciante no solicitó la declaración de que “Forestal Arauco” había vulnerado los derechos fundamentales y el Tribunal de la instancia declaró que ésta vulneró, junto con las demandas principales, los derechos fundamentales denunciados, incurriendo en la causal de ultra petita.

Que la petición de nulidad en la forma planteada será desestimada desde ya, debido a que esa alegación no guarda ninguna relación con el texto expreso de la denuncia, los fundamentos y las peticiones concretas puesta en conocimiento del órgano jurisdiccional respectivo, así como a los propios actos de procedimiento de ésta recurrente, y la defensa de sus derechos durante todo el procedimiento. La alegación aparece como extemporánea, inconducente y sesgada, sin tener seriedad alguna.

Por lo anterior, la tercera causal de invalidación será desestimada.

**Vigésimo:** Por lo concluido precedentemente, será acogido el recurso de nulidad de la recurrente **“SMRA SpA” (“SMRA”)**, sólo en



cuanto se incurrió en el vicio de extra petita, al condenarla solidariamente al pago de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales sin tener la calidad de empleadora de los demandantes, ni de mandante respecto de esos empleadores, de la letra **E) del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo**.

En lo demás, así como lo recursos deducidos por “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.”, “Sociedad de Transportes Carmar Limitada”, “Transportes San Joaquín Limitada”, “Empresa de Transportes El Diamante”, “Estela Espinoza y Compañía Limitada”, “Sociedad de Transportes Maguillines Ltda.”, “Sociedad Forestal Lage Y Cía. Limitada” Y Francisco Joel Retamal Jorquera, como por “Forestal Arauco S. A.”, serán desestimados con costas, por no haber tenido plausible parta alzarse contra la sentencia definitiva.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 183-A, 183-B, 183-D, 474, 477, 478 letras b) c) ye) y 482 del Código del Trabajo, se declara:

I) Que se rechazan los recursos de nulidad de “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.”, “Sociedad de Transportes Carmar Limitada”, “Transportes San Joaquín Limitada”, “Empresa de Transportes El Diamante”, “Estela Espinoza y Compañía Limitada”, “Sociedad de Transportes Maguillines Ltda.”, “Sociedad Forestal Lage Y Cía. Limitada” Y Francisco Joel Retamal Jorquera, como por “Forestal Arauco S.A.”, interpuesto en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos R. I. T. T-8-2020, R.U.C. 20- 4-02788049-07637-5 del Juzgado de Letras del Trabajo de Constitución, con costas declarándose que la sentencia y el juicio no son nulos a su respecto.

**Se regulan las costas personales que deberán ser soportadas solidariamente por los recurrentes antes indicados, en la suma de dos millones de pesos (\$2.000.000.-)**

II) Que **SE ACOGE parcialmente y sin costas**, el recurso de nulidad interpuesto por el tercero coadyuvante **“SMRA SpA” (“SMRA”)**, en contra de la sentencia definitiva antes indicada, sólo



por la causal de la letra ***E) del artículo 478 del Código del Trabajo***, sólo en cuanto fue condenada solidariamente al pago de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, declarándose la nulidad parcial de esa sentencia y respecto de ese fundamento; sin que la sentencia sea nula en lo demás.

Díctese de inmediato y sin previa vista, la respectiva sentencia de reemplazo en esa materia.

Redacción del ministro Carrillo González.

Regístrese y devuélvase.

**Rol I. C. 168-2021/Laboral.**

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de esta causa, no firma el Ministro don Rodrigo Biel Melgarejo, por hallarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema.



Carlos Enrique Carrillo González  
MINISTRO  
Fecha: 27/01/2022 12:20:56

Robert Keith Morrison Munro  
ABOGADO  
Fecha: 27/01/2022 13:29:04



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Robert Morrison M. Talca, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

En Talca, a veintisiete de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.





## **Sentencia de reemplazo.**

Recurso de Nulidad Laboral Rol I. C. 168-2021.

“Fernando Valdés Espinoza; Cristian Sebastián Garrido Riveros y David Antonio Palma Muñoz, por el Sindicato Inter Empresas de Trabajadores del Transporte Y Servicios Forestales del Bosque e Industria de Constitución, en contra de “Sociedad De Transportes Maguillines Limitada”, “Transportes San Joaquín Ltda.”, “Empresa de Transportes El Diamante Ltda.”, “Sociedad de Transportes Carmar Ltda.”, “Estela Espinoza Jaque y Cía. Ltda.”, Francisco Joel Retamal Jorquera, “Sociedad Forestal Lage y Compañía Limitada”, “Transportes José Aguilar Cortez E.I.R.L.” y “Forestal Arauco S.A.”.

---

Talca, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

### **Visto:**

Se reproduce la sentencia anulada, salvo la decisión IX, sólo en cuanto dice relación con “**SMRA SpA**” (“**SMRA**”); y, además se tiene presente:

**Primero:** Que la denuncia de tutela no fue enderezada en contra de “**SMRA SpA**” (“**SMRA**”), según se lee en el cuerpo de la denuncia, como en el petitorio de la misma, lo que hace improcedente que será condenada a pagar solidariamente la indemnización por los perjuicios con ocasión de la infracción de derechos constitucionales.

**Segundo:** Que al así ordenarlo el señor juez de mérito, se incurrió en el vicio de ultra petita, por haberse extendido su competencia hasta puntos no sometidos a su decisión.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 477 letra e), 459 y 495 del Código del Trabajo, se declara:

Que se rechaza, sin costas, la demanda indemnizatoria sólo respecto de “**SMRA SpA**” (“**SMRA**”).

Redacción del ministro Carrillo González.

Regístrese y devuélvase.

**Rol I. C. 168-2021/Laboral.**

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de esta causa, no firma el Ministro don Rodrigo Biel



Melgarejo, por hallarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema.



Carlos Enrique Carrillo González  
MINISTRO  
Fecha: 27/01/2022 12:20:59

Robert Keith Morrison Munro  
ABOGADO  
Fecha: 27/01/2022 13:29:12



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Robert Morrison M. Talca, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

En Talca, a veintisiete de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

